TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
Sala Civil – Familia

Magistrado Sustanciador:
Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de
dos mil veinticuatro (2024).

Ref: Conflicto de competencia. Exp. 25000-
22-13-000-2024-00040-00.

Decídese el conflicto que en torno a la competencia para seguir conociendo del trámite de privación de patria potestad promovido en favor de las niñas H.S.B.C. y K.Y.B.C. contra Carolay Paola Benítez Chaverra, enfrenta a los juzgados promiscuos de familia de Guaduas y Villeta.

I.- Antecedentes

Atendiendo la solicitud presentada verbalmente ante el juzgado promiscuo de familia de Guaduas por la abuela materna de las niñas H.S.B.C. y K.Y.B.C. con el propósito de que se privara a la progenitora de éstas de la patria potestad por haber incumplido sus obligaciones como madre, dejándolas en condición de abandono en diversas circunstancias, petición que coadyuvó la comisaría de familia de la localidad, el 23 de enero del año pasado, el citado despacho judicial admitió a trámite la demanda.

El 5 de diciembre último dictó sentencia suspendiendo el ejercicio de los derechos de la patria potestad en relación con la niña H.S.B.B., al paso que, relativamente a la otra menor, consideró que carecía de competencia para seguir conociendo del asunto, pues de acuerdo con la información suministrada por la comisaría de familia, la niña se encuentra en un hogar sustituto en el

municipio de Sasaima, por lo que es el juzgado de familia de esa sede judicial el que debe seguir tramitando el proceso.

Pero recibido el diligenciamiento por el juzgado de Villeta, se rehusó a conocer de él observando que cuando el juez admite la demanda queda establecida la competencia por el favor territorial y sólo puede ser alterada cuando lo proponga el demandado a través de los mecanismos legales procedentes, en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis.

Fue así como arribaron las diligencias a esta Corporación para dirimir la colisión, a lo que se procede ya que enfrenta a dos juzgados pertenecientes al mismo distrito judicial.

Consideraciones

Ciertamente, de vieja data se tiene decantado que la competencia está determinada por varios factores, contándose entre ellos el territorial, que es el que aquí cumple definir.

Y para ello, bueno es memorar que conforme al inciso 2° del numeral 2° del artículo 28 del código general del proceso, en los “*procesos de alimentos, pérdida o suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulación de visitas, permisos para salir del país, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel*”, precepto del que ha dicho la jurisprudencia, emerge claro que “*la competencia para conocer de este tipo de controversias, con base en el factor territorial, recae en la autoridad del lugar ‘del domicilio o residencia’ del niño, niña o adolescente, conclusión que se robustece con las previsiones del artículo 97 del Código de Infancia y Adolescencia, según las cuales ‘[s]erá*

competente la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente’ (se destaca)”, pues “tal disposición resulta aplicable, no solo en el contexto de las autoridades administrativas y los procesos de restablecimiento de derechos de menores de edad, sino en las controversias de conocimiento judicial”, ya que “aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder éstos la atribución por no decidir dentro de los plazos señalados en el parágrafo 2º, artículo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ahí, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los últimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacción de la obligación a cargo del Estado de ‘[a]segurar la presencia del niño, niña o adolescente en todas las actuaciones que sean de su interés y que los involucren...’ así como ‘[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal’, tal y como lo establece al ordinal 34, artículo 41 de la aludida ley” (Exp. 2008-00649-00) (CSJ AC581-2020, 25 feb., rad. 2020-00521-00 y CSJ AC1787-2021, 12 may., rad. 2021-01222-00, que reiteró la providencia CSJ AC 4 jul. 2013, rad. n.º 2013-00504-00)” (Cas. Civ. Auto de 17 de junio de 2021, exp. AC2415-2021).

Claro, es cierto que una vez admitida la demanda no le es dable al juez renegar la competencia que por ese factor asumió, pues queda sometido por tal aspecto a la actividad de las partes, comoquiera que un nuevo pronunciamiento sobre esa materia sólo le es factible en la medida en que el interesado cuestione el punto, en virtud del “principio de la «perpetuatio jurisdictionis»” (Cas. Civ. Auto de 28 de septiembre de 2012; exp. 2011-02632-00); pero indudablemente ese principio no puede “considerarse como un parámetro pétreo o inalterable” en aquellos casos en que el “interés superior del menor se pueda ver comprometido”, debido al “carácter garantista y protector del ordenamiento jurídico vigente en relación con los niños,

niñas y adolescentes” (Auto citado), pues de lo que se trata es de “garantizar a los menores el ejercicio pleno de sus derechos, como lo prevé el artículo 44 de la Constitución Política, entre otros, acceder en forma libre y expedita a la administración de justicia” (Cas. Civ. Auto de 10 de agosto de 2011; exp. 2011-01302-00).

¿Qué quiere decir lo anterior? Que habiendo variado el domicilio de la menor KYBC del municipio de Guaduas al de Sasaima, la regla de atribución de competencia territorial que debe aplicarse con el fin de materializar el interés superior de la niña, es la del lugar donde ésta se encuentra, con todo y que previamente otro despacho judicial haya asumido su conocimiento, no sólo porque esa es la interpretación que mejor responde a la necesidad de *“auspiciarles el acceso directo a la administración de justicia en el lugar en que se encuentren ubicados, pues de esta forma se evita que tengan que incurrir en traumatismos o dificultades de diversa índole para reparar sus necesidades, que a la postre podrían verse insatisfechas de tener que acudir a un lugar distinto de donde se localizan”*, lo que explica por qué *“en “casos de carácter excepcional en los cuales se encuentren involucrados menores de edad, habida cuenta de la prevalencia de sus derechos e interés superior, por su relevancia constitucional, debe admitirse posible la alteración de la competencia inicialmente establecida”*, sino porque *“insístase, el domicilio del sujeto de especial protección es fuero especial de atribución de competencia territorial, aún cuando varíe en el curso del proceso; amén de que el inciso 2° del artículo 139 del Código General del Proceso prevé que «[e]l juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo los factores subjetivo y funcional»” (Cas. Civ. Auto de 22 de febrero de 2021, exp. AC438-2021).*

Puestas así las cosas, debe concluirse en que hizo bien el juzgado de Guaduas al abstenerse de seguir conociendo del asunto, pues el cambio de domicilio de la

niña respecto de la cual se viene procurando restablecerle sus derechos, lo habilitaba para ello; y como su domicilio ahora está en el municipio de Sasaima, que es donde está ubicada en un hogar sustituto, es el juzgado de familia del circuito al que pertenece esa municipalidad, el que debe continuar conociendo de la pretensión de privación de la patria potestad en relación con la niña K.Y., pues no se olvide que esa competencia arraigada por el territorio, *“guarda una estrecha relación con su entorno, a la inmediación de las pruebas, a los principios de eficacia y economía de los procesos, al contacto directo del juez o autoridad administrativa, lo que facilita la garantía oportuna y efectiva de los derechos de los menores de edad. De manera que, no puede sobreponerse entonces los mandatos procesales por encima de la materialización de las garantías efectivas de dichos sujetos”* (Cas. Civ. Auto. de 14 de octubre de 2021, exp. AC4874-2021).

II.- Decisión

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil - Familia, declara que el competente para seguir conociendo del trámite de privación atrás reseñado en relación con la niña K.Y.B.C. es el juzgado promiscuo de familia de Villeta, al que se enviará de inmediato el expediente, comunicándose por oficio lo aquí decidido al otro juzgado involucrado en el conflicto, que así queda dirimido.

Notifíquese y cúmplase,

Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Firmado Por:

German Octavio Rodriguez Velasquez
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 004 Civil Familia
Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6e3f2fbd1dc5dd2ea4930d9dfe0154fbc7d8fa638dbf1e4945bf31c03f13b9f9**

Documento generado en 29/02/2024 08:16:24 a. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>